



LUIS ROBAYO/AFP

Derechos laborales en Venezuela

# En respeto a la libertad sindical

Carlos Patiño\*

El Capítulo Laboral del Informe Anual de Provea se presenta en un contexto en el cual, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 400 millones de empleos se han visto afectados desde el inicio de la pandemia del coronavirus, siendo el sector más vulnerable el de los trabajadores informales, impedidos de volver a las calles e imposibilitados de trabajar desde sus casas

La situación de los derechos laborales durante el año 2019 estuvo signada por la pérdida de la capacidad adquisitiva del salario de los trabajadores y del deterioro de su calidad de vida; con el agravante de una desbalanceada dolarización, de facto, de algunos sectores de la economía que profundizó las desigualdades entre quienes tuvieron acceso a divisas y para quienes su único ingreso fue percibido en bolívares devaluados por la hiperinflación.

Tras un retraso de un par de años, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) actualizó las estadísticas de la Fuerza de Trabajo hasta 2018, año en el que la tasa de desocupación se ubicó en 6,4 %, según la data oficial, un aumento de 0,3 puntos porcentuales con respecto a 2017 cuando el desempleo cerró en 6,1 %.

Con esta variación, de una población económicamente activa de 16.029.529 personas, 15.011.108 personas estaban empleadas, lo que resulta en una tasa de ocupación de 93,6 %. El restante, 1.018.421 personas, estaban en condición de desempleadas (6,4 %).

Del total de desocupados, 566 mil 144 eran hombres y 452 mil 277 eran mujeres, lo que indica que la tasa de desocupación es superior en las mujeres, que registran 6,6 % de desempleo.

De la población ocupada, 8.929.536 personas estaban en el sector formal (59,5 %), mientras que 6.081.572 personas trabajaban en la informalidad (40,5 %), una baja de 0,5 puntos porcentuales respecto a 2017. Del grupo desempleado, la estadística devela que 33 % eran trabajadores por cuenta propia, 4,2 % más que en el año previo, una señal de la migración de trabajadores del ramo formal al informal en medio de condiciones económicas adversas con hiperinflación y pérdida del poder adquisitivo.

El sector privado se posicionó al cierre de 2018 como el mayor empleador del país, al congregarse a 11.019.784 personas del total ocupado (73,4 %). El sector público, en cambio, agrupa a 3.923.428 personas que equivalen a 26,1 % del total. No obstante, con respecto a 2017, se observa un descenso de la nómina del ramo privado de la economía.

El segmento de la población de 15 a 24 años registró la mayor tasa de desocupación con un registro de 16,1 %, seguido del grupo de 65 años y más, donde el desempleo alcanzó a 7,7 %.

El presidente de facto, Nicolás Maduro, sostuvo —a mediados de enero de 2020— durante la presentación de su Memoria y Cuenta 2019,

ante la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, que Venezuela “[...] mantiene cifras de desempleo que ya envidiarían estos países que se atreven a agredirnos con sus campañas mediáticas y de mentiras”. También agregó:

En el año 2019 mantuvimos el récord de 6 % de desempleo y promovimos políticas especiales para la protección del primer empleo a través de la Misión Chamba Juvenil, contrario al trabajo esclavo que promueven en los países que han hecho del neoliberalismo su vergonzoso estandarte que con salarios paupérrimos condenan a las grandes mayorías a la miseria.

El mandatario de facto destacó que en 2019 se mantuvo “[...] el empleo formal en un 60 % en la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras”. Además, destacó como un logro cuando en 2019 se aprobaron:

[...] varios aumentos de salarios y de cesta tickets en nueva modalidad y de las tablas salariales; por vía del sistema de bonos, además, hemos entregado más de 8,1 billones de bolívares a más de 17 millones de personas protegidas por el Carnet de la Patria.

Señaló, además, que en diciembre de 2019 ejecutaron “con un alto nivel de éxito” una bonificación de fin de año vinculada al petro, el criptoactivo creado por su administración. El beneficio favoreció a 8 millones de trabajadores y pensionados.

Las cifras correspondientes de empleo generan una duda razonable de no ser ciertas si consideramos que, de acuerdo a cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela, desde el último trimestre de 2013 el Producto Interno Bruto es negativo de manera consecutiva con una caída de la economía desde 2013 a 2018 de 47,7 %. La tasa de desempleo que difundió el Gobierno de facto para 2019 fue equivalente a la de hace más de diez años (2008), cuando el PIB venía durante cinco años con un balance positivo.

Al cierre de este informe, el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPST) no publicó su Memoria y Cuenta 2019, ni estadísticas relacionadas con diversos indicadores socioeconómicos, lo cual impide el ejercicio de la contraloría social prevista en el artículo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) vigente, y vulnera la garantía del derecho a la información a los trabajadores.

Fue relevante que durante este período la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó su *Informe por la reconciliación nacional y la justicia social en la República Bolivariana de Venezuela*, el documento más importante que se haya escrito sobre violaciones a la libertad sindical en Venezuela.



A partir de marzo de 2018 se activó por parte del Consejo de Administración de la OIT, una Comisión de Encuesta para la República Bolivariana de Venezuela, el mecanismo de investigación de más alto nivel de ese organismo parte de la Organización de las Naciones Unidas.

La queja que activó la Comisión de Encuesta se refiere a la inobservancia de los Convenios de la OIT número 26 (sobre los métodos para la fijación de salarios mínimos, 1928), número 87 (sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948) y número 144 (sobre la consulta tripartita –normas internacionales del trabajo–, 1976); y, en particular, para verificar los actos de violencia, otras agresiones, persecución, acoso y una campaña para desprestigiar a la organización de empleadores Fedecámaras, incluidos sus líderes y afiliados, así como injerencia de las autoridades, falta de consulta tripartita y exclusión del diálogo social; extensivo también a las organizaciones de trabajadores no afines al gobierno.

La Comisión de Encuesta estuvo integrada por tres miembros independientes designados en junio de 2018 por el Consejo de Administración de la OIT: el juez presidente Manuel Herrera Carbuccia (República Dominicana, presidente de la Comisión), la Dra. María Emilia Casas Baamonde (España), y el Dr. Santiago Pérez del Castillo (Uruguay). En fecha 30.09.2019 se publica el Informe de la Comisión de Encuesta, exponiendo el resultado de las averiguaciones de la Comisión, así como conclusiones y recomendaciones orientadas a promover “[...] el respeto de la libertad sindical como base de un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social”.

La Comisión constata en sus conclusiones (capítulo 7), la existencia en el país de un conjunto de instituciones y prácticas que atentan contra las garantías y derechos establecidos en los Convenios objeto de la queja. Afectan en particular la existencia y la acción de organizaciones libres e independientes de empleadores y trabajadores y al desarrollo de un diálogo social de buena fe en un ambiente de confianza y respeto mutuo. Estas prácticas y situaciones se insertan en un complejo entramado institucional e informal

## Propuestas y exigencias a los poderes públicos

- Mitigar la pérdida del poder adquisitivo del salario, adoptando medidas eficaces para el control de la inflación, cesando la política lesiva al derecho a un salario suficiente, lo cual afecta la capacidad de compra de alimentos básicos, medicamentos y otros bienes esenciales de los trabajadores y trabajadoras.
- Implementar el mecanismo de diálogo social tripartito entre trabajadores, trabajadoras, entes empleadores del sector público y privado y el Estado, establecido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en temas como la fijación del salario mínimo y el diseño de las políticas públicas laborales.
- Respetar el derecho a la negociación colectiva mediante la activación, discusión y firma de las convenciones colectivas vencidas, principalmente en las instituciones y empresas del Estado. Garantizar el ejercicio del derecho constitucional a la huelga, manifestación pacífica, libertad de asociación y reunión, así como investigar y sancionar los hostigamientos y despidos por razón de discriminación política.
- Respetar plenamente el derecho a la libertad sindical, poniendo fin a las medidas administrativas y judiciales que lo obstaculizan y criminalizan, en especial la liberación inmediata de todo empleador o sindicalista que pudiese permanecer en prisión en relación con el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones.
- Cumplir con las recomendaciones tanto de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, como del Informe de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), orientadas a promover el respeto de la libertad sindical como base de un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible, el cese de la persecución a los defensores de derechos laborales y la justicia social.

que hostiliza y socava la acción de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) y de las organizaciones de trabajadores no afines al gobierno. El entramado integra una multiplicidad de elementos (jurídicos, políticos, institucionales, sociales, etcétera) algunos de los cuales reflejan problemas sistémicos en el funcionamiento del Estado de derecho en el país.

De manera general, las conclusiones de la Comisión alertan sobre:



AFP

- Un persistente y grave hostigamiento de la acción de Fedecámaras y sus afiliados, así como de organizaciones de trabajadores no afines al gobierno; y una situación de impunidad en relación con actos de violencia, amenazas, persecución, estigmatización, intimidación, así como otras vulneraciones de las libertades civiles, sufridas por sus dirigentes y miembros.
- Prácticas de favoritismo o promoción de organizaciones paralelas y de discriminación, suplantación e injerencia en las actividades de las organizaciones de empleadores y trabajadores no afines, e injerencia en las relaciones entre empleadores y trabajadores; todo ello vulnerando las garantías previstas en el Convenio N° 87.
- La inobservancia de las obligaciones de consulta tripartita sobre la fijación del salario mínimo (Convenio N° 26) y sobre cuestiones relativas a la promoción de la aplicación de las normas internacionales del trabajo (Convenio N° 144), así como la ausencia de diálogo social en los términos preconizados por las normas de la OIT.

A la luz de los problemas identificados, la Comisión de Encuesta formula recomendaciones en aras de asegurar el cumplimiento de los Convenios invocados sobre las cuestiones objeto de la queja, en particular el respeto de la libertad sindical como base de un diálogo tripartito para la reconciliación nacional, el desarrollo económico sostenible y la justicia social.

Continuó la política de persecución y hostigamiento a dirigentes sindicales obstaculizando el ejercicio de la libertad sindical.

Las reiteradas violaciones a las convenciones colectivas fueron causa de paros, huelgas y movilizaciones de calle convocadas por las organizaciones sindicales.

\*Coordinador de Exigibilidad en Provea. Abogado especialista laboral y escritor.